

Santiago, veintiuno de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que ante este tribunal se efectúa la audiencia de juicio oral de la causa seguida en contra de José Luis Encarnación Pérez, dominicano, cédula de identidad nacional obtenida mediante canje penal Nro. 14.953.888-7, instalador de piscinas, domiciliado en calle Emiliano Zapata Nro. 883, comuna de Recoleta, representado por los defensores privados Mauricio Cortés Pinto y Catalina Vásquez Morales; de Carlos Encarnación, dominicano, cédula de identidad nacional obtenida mediante canje penal Nro. 14.898.698-3, peoneta, domiciliado en calle pasaje Padua Nro. 1471, comuna de Cerro Navia, representado por el defensor privado Jorge Pizarro Lincuate; de Malvin Eduardo Berroa Carrasco, dominicano, cédula de identidad nacional obtenida mediante canje penal Nro. 14.953.887-9, reparador de celulares y ayudante de fletes, domiciliado en calle Nueva La Obra Nro. 3606, comuna de Recoleta y de Pablo Raúl Beltrán Araujo, dominicano, cédula de identidad nacional obtenida mediante canje penal Nro. 14.950.686-1, obrero, domiciliado en Avenida Independencia Nro. 560, departamento Nro. 18, comuna de Independencia, representados ambos por la defensora privada Jeannette Cofré Soto. Sostiene la acusación el fiscal Francisco Rojas Rubilar.

Segundo: Que el Ministerio Público funda su acusación en los siguientes hechos: El día 18 de julio de 2024, a las 17:55 horas aproximadamente, en la intersección de las calles 14 de la Fama con calle Costa Rica, comuna de Independencia, los imputados sin contar con las autorizaciones competentes, portaban, transportaban y mantenían en su poder, con el objeto de traficar al interior del vehículo en el que se movilizaban marca Suzuki, modelo Alto, placa patente única DFZY77, en un bolso tipo mochila 12 envoltorios de nylon contendora de cannabis con un peso de 295 gramos, 4 bolsas de nylon contenedora de clorhidrato de cocaína con un peso de 3,4 gramos, además de 37 tarjetas bancarias de diversa marca y entidad con diferentes propietarios y 1 dispositivo transbank electrónico, vehículo que era conducido por José Luis Encarnación Pérez, como copiloto Carlos Encarnación, quien además portaba dinero en efectivo por la suma de 491.000 pesos, mientras que como acompañante en el asiento trasero costado derecho Malvin Eduardo Berroa Carrasco, quien portaba la suma de 229.000 pesos y en el asiento trasero izquierdo viajaba Pablo Raúl Beltrán Araujo, quien mantenía en su poder la suma de 326.000 pesos.

A juicio del Ministerio Público, les corresponde a los acusados responsabilidad a título de coautores del delito consumado de tráfico de drogas tipificado en el artículo 3, en relación con el artículo 1 de la Ley Nro. 20.000.

Tercero: Que en su apertura el fiscal sostiene que los cuatro acusados tenían conocimiento del transporte y posesión de la droga hallada. Anticipa que se acompañarán pericias que corroborarán que se trata de cannabis y otras drogas más duras. Fundamenta su tesis en que todos los acusados estaban al interior de un mismo vehículo y que se les encuentra más de un millón de pesos en efectivo junto a diversas tarjetas bancarias y un dispositivo Transbank que se utiliza para clonar tarjetas. Estima que el dinero proviene de actividades ilícitas pues ninguno pudo justificar durante la investigación su origen lícito.

En sus alegatos iniciales, la defensora de Pablo Beltrán Araujo y Malvin Berroa Carrasco destacó el tiempo que sus representados han sido privados de libertad y que siempre han sostenido que no tienen participación en este ilícito. Indica que ambos iban sentados en la parte trasera de un vehículo que no les pertenecía y que la mochila que contenía la droga era de otro de los acusados, quien la portaba en sus pies. A su vez, el defensor de Carlos Encarnación adelanta una defensa colaborativa en la que su representado prestará declaración y reconocerá su participación. Por su

parte, el defensor de José Luis Encarnación Pérez niega que su representado haya tenido conocimiento que otro de los acusados portaba y transportaba droga. Tampoco sabía que portaba dinero proveniente de ilícitos. Denuncia un ensañamiento en contra de su representado por su calidad de ciudadano extranjero y que el Ministerio Público pretende generar un contexto que sugiera que su representado viajaba en ese vehículo cometiendo ilícitos, al hacer mención las tarjetas bancarias y al dispositivo Transbank sin que a su respecto se haya formulado una imputación concreta. Termina solicitando la absolución de su representado por falta de participación.

Cuarto: Que previa información de sus derechos y asistidos por sus defensores, todos los acusados decidieron prestar declaración en el presente juicio. Primeramente, Malvin Berroa Carrasco señaló libremente que el 18 de junio de 2024 se había mudado recientemente a un nuevo departamento y se encontraba junto a Luis Encarnación y Pablo Beltrán. Decidieron ir al supermercado y Luis Encarnación llamó a Carlos Encarnación para que los llevara en su automóvil. Después de efectuar compras en el supermercado, los cuatro acusados fueron detenidos en el vehículo por carabineros en calle 14 de la fama. Una vez que carabineros les ordenó abandonar el vehículo, carabineros sacó una mochila de la que no tenía conocimiento.

Interrogado por su defensora enfatiza que no tenía conocimiento de que había una mochila dentro del vehículo. Señala que tanto la mochila, como el vehículo le pertenecía a Carlos Encarnación, quien no les dijo que llevaba dentro de ella. Agrega que ese día portaba alrededor de 220.000 pesos para comprar electrodomésticos y cosas para el hogar. Indica que no tiene antecedentes penales. Interrogado por el defensor de José Luis Encarnación, precisa que cuando nombró a Luis se está refiriendo a José Luis Encarnación.

Contrainterrogado por el fiscal, señala que Carlos Encarnación es amigo de ellos, aunque lo conoce hace poco. Refiere que se subió en la parte trasera izquierda del vehículo, detrás del conductor. Aduce que recién vio la mochila cuando el carabinero se asomó por el lado del chofer y la sacó. Señala que fue lo poco que pudo ver porque los pusieron delante del vehículo y con la cabeza bajada. Justifica el origen del dinero que portaba en su trabajo como reparador de celulares y ayudante de fletes, sin embargo, señala que no presentó ninguna documentación que respaldara este punto.

En segundo lugar, prestó declaración Pablo Beltrán Araujo, quien manifestó libremente que el 18 de julio de 2023 se reunió con José Luis Encarnación y fueron al supermercado. Ahí, Carlos Encarnación le pide como favor a José Luis Encarnación que maneje el vehículo para atender un llamado telefónico de sus hijos desde República Dominicana, a lo que este último accede. Añade que, tras el hallazgo de la mochila, carabineros les preguntó de quién era y que como él no tenía conocimiento de su existencia, no respondió.

Interrogado por su defensora señala que no pudo ver bien de dónde sacaron la mochila porque le ordenaron mantener la cabeza hacia abajo, pero que el carabinero abrió la puerta del chofer. Indica que es muy difícil que les hagan contrato de trabajo.

Contrainterrogado por el fiscal reconoce que ese día portaba 326.000 pesos y explica que es lo que cobra por una quincena, aunque no tiene cómo acreditarlo porque no tiene documentos. Señala que se lo dijo a su abogada y que, si bien su jefe podría haber declarado al respecto, tras ser privado de libertad perdió contacto con él. Relata que José Luis Encarnación llamó a Carlos Encarnación, quien es el dueño de vehículo cuya marca desconoce, pero se trata de un carro chiquito, en el cual fueron a hacer compras al supermercado. Expresa que Malvin compró una bolsa de bienes en el supermercado y que no se dio cuenta que había una mochila.

En tercer lugar, Carlos Encarnación declaró libremente que –cuando José Luis Encarnación lo llamó para que los llevara al supermercado– él ya tenía en su poder la mochila. Indica que, tras salir del supermercado, recibe una videollamada de sus hijos y le pide a José Luis Encarnación que maneje. Relata que cuando los detiene carabineros, señala que se puso nervioso porque sabía lo que contenía la mochila. Indica que tenía la mochila del lado del copiloto y la puso atrás suyo. Expresa que cuando los policías encontraron la droga, no asumió su posesión debido a su nerviosismo, pero que tras la detención habría reconocido que le pertenecía únicamente a él la mochila y que los otros acusados no tenían nada que ver con la droga.

Interrogado por su defensor precisa que –tras pasarle las llaves del vehículo a José Luis Encarnación– se sentó en el asiento del copiloto. Afirma no conocer al dueño de la mochila y explica que fue una compra que realizó en el parque. Contrainterrogado por el fiscal, reitera que conocía el contenido íntegro de la mochila, esto es, la droga, las tarjetas bancarias y el dispositivo Transbank que clona tarjetas de crédito. Respecto a esto último, aduce que sabía de la existencia de esta máquina, pero que él no clonaba tarjetas. Complementa que el parque donde compró la mochila con la droga y las otras especies pertenece a la comuna de Conchalí. El mismo día de los hechos, se le acercó un joven e hicieron el intercambio. Indica que nunca pudo declarar esto ante un fiscal porque no lo dejaron declarar.

Ante las preguntas de los defensores de los otros acusados responde que no es familiar de José Luis Encarnación, aunque son amigos que se tratan como si fueran hermanos. Expresa que quien le vendió la droga, se la entregó dentro de la mochila y él la puso debajo del asiento del copiloto para que los demás acusados no se dieran cuenta. Expresa que, durante la detención, él fue el último en bajarse del vehículo. Y fue entonces, cuando estaba sólo en el vehículo, que cogió la mochila y la puso hacia atrás. Cree que José Luis Encarnación no logró ver cuando sacó la mochila de debajo del asiento del copiloto.

Autorizado el fiscal para volver a interrogar a Carlos Encarnación, este reitera que los otros tres ocupantes del vehículo descendieron del mismo antes que él. Contextualiza que esto ocurrió mientras carabineros ya se encontraba realizando el control policial. Precisa que entonces había dos funcionarios policiales efectuando la fiscalización. Añade que carabineros no vio cuando él movió rápidamente la mochila desde debajo del asiento del copiloto hacia atrás.

En cuarto lugar, prestó declaración José Luis Encarnación. Inicia su relato señalando que el 18 de julio de 2024 se reúnen en su casa y él llama a Carlos Encarnación para que los lleve al supermercado. Tras salir de este local comercial, Carlos recibe una llamada y le pasa el volante. En el trayecto de vuelta a su casa, carabineros los detiene y encuentran la mochila con la droga en su interior. Aduce que no había visto la mochila cuando el carabinero les pregunta por su contenido. Una vez que estaban detenidos en la comisaría, Carlos les cuenta que la mochila era suya y les revela su contenido.

Interrogado por su defensor, enfatiza que recién vio la mochila cuando el carabinero la sacó del vehículo y les preguntó por su contenido. Agrega que ese día no portaba dinero. Contrainterrogado por el fiscal, reconoce que manejó el vehículo sin contar con licencia de conducir.

Quinto: Que para acreditar su pretensión punitiva, el Ministerio Público ofreció en primer término la declaración de tres funcionarios policiales. Primeramente, compareció en estrados Jaime Ignacio Guarda Santibáñez, cabo 1° de carabineros, domiciliado en Carrión Nro. 1795, comuna de Independencia, quien relata que el 18 de julio de 2024 a las 17:55 horas aproximadamente, junto a su jefe de Patrulla Carlos Molina Vergara, advirtieron que un vehículo que

conducía por avenida 14 de la fama cambió de pista bruscamente en varias ocasiones al ver la presencia policial, por lo que realizaron un control investigativo. Entonces pudo verificar que el vehículo era conducido por una persona de nombre José Luis y al interior se encontró un bolso negro con azul. A su vez, señala que este bolso contenía doce envoltorios de nylon transparente con una sustancia vegetal verdosa, cuatro envoltorios contenedores de una sustancia polvorienta de color blanca, treinta y siete tarjetas bancarias de distintos propietarios y una máquina Transbank. Complementa que, tras el peritaje de rigor, se pudo verificar que las sustancias correspondían a marihuana.

Agrega que al procedimiento acudieron otros dos funcionarios policiales para prestar cobertura durante la fiscalización. Indica que él se bajó y se dirigió hacia el conductor. De forma paralela, su jefe de patrulla –Teniente Carlos Molina Vergara– fue hacia el copiloto y los otros dos funcionarios policiales –el oficial a cargo Mateluna Castillo y el conductor Julio Gatica– se ubicaron en la parte trasera del vehículo. Relata que procedieron a bajar primeramente al conductor del vehículo, acto seguido al copiloto y finalmente a los otros dos acompañantes que iban en la parte posterior. Declara que vio que los sujetos que iban en la parte trasera del vehículo pusieron el bolso en el sector de sus pies.

Asimismo, se le exhiben las 19 fotografías del set fotográfico consignado con el Nro. 1 de otros medios de prueba. En la primera fotografía se ven 12 envoltorios de nylon con una sustancia vegetal verdosa y 4 envoltorios transparentes con una sustancia polvorienta blanca. En la segunda fotografía se aprecia una mochila negra con azul ubicada al medio de la segunda cabina del vehículo. Sin embargo, este testigo indica con un puntero laser el lugar donde la recogió, esto es, donde van los pies de los pasajeros de la cabina trasera del vehículo. Explica que la sacó de ahí abajo y la posicionó al medio de los asientos traseros para sacar la respectiva fotografía. En la tercera fotografía, se ve la mochila con su cierre abierto y con los envoltorios de nylon transparente en su interior. Desde la cuarta a la decimoprimer fotografía, se ve a los cuatro acusados de frente y de espalda. En la decimosegunda fotografía aparece de frente el vehículo marca Susuki, placa patente DFZY77. En la decimotercera fotografía se vislumbra la misma placa patente en la zona posterior del vehículo. En la decimocuarta fotografía constan los documentos vigentes del vehículo. En la decimoquinta fotografía aparece el vehículo anterior detenido en la vía pública y los acusados arrodillados en la parte frontal del mismo con sus manos en sus cabezas. La decimosexta fotografía es una vista aérea de la zona, particularmente de la intersección de las calles 14 de la Fama y Costa Rica. En la decimoséptima fotografía aparece el dinero en efectivo incautado en poder de los acusados, en billetes de diversa denominación y que el testigo señala que suma 1.046.000 pesos. En la decimoctava fotografía hay 6 teléfonos celulares. Y en la decimonovena fotografía hay 37 tarjetas bancarias de distintos titulares y una maquina Transbank.

Contrainterrogado por las defensas afirma que no hubo una persecución contra los acusados, sino que tras unos segundos después que los policías hicieran uso de su equipo sonoro, detuvieron la marcha del vehículo. Afirma que transcurrieron unos cinco minutos antes que llegara el personal policial de refuerzo, pero en el intertanto ya habían bajado a fiscalizar a los acusados y solicitado la licencia de conducir al chofer del vehículo. La solicitud de que los acusados abandonaran el vehículo se efectuó tras la llegada del segundo carro policial. Refiere que el conductor era José. En una primera instancia, identifica en la sala como copiloto a Malvin Berroa Carrasco y como conductor a Pablo Beltrán Araujo. Posteriormente, señala que se equivocó porque ha pasado más de un año y que recuerda el nombre de José. Reitera que observó los movimientos de los sujetos que iban en la parte trasera del vehículo. Advierte que

guardan algo debajo de sus pies y él les solicita que mantengan sus manos donde las pueda ver. Dice que vio lo anterior tras acercarse al conductor y pedirle su licencia de conducir.

Seguidamente, prestó declaración por videoconferencia Carlos Patricio Molina Vergara, teniente de carabineros, domiciliado en la Escuela de Especialidades de Carabineros ubicada en calle Cuadro Verde Nro. 350, comuna de Estación Central, quien interrogado por el fiscal señala que durante la tarde del 18 de julio de 2024 se encontraba realizando funciones de jefe de turno y jefe de patrulla, en compañía del cabo 1° Jaime Guarda Santibáñez cuando, alrededor de las 18 horas, les llamó la atención un vehículo marca Suzuki que transportaba a 4 sujetos a bordo, porque al ver la presencia policial cambiaron rápidamente su dirección y aceleraron la marcha. Refiere que tras la fiscalización encontraron en su poder cannabis sativa, seis celulares, 1.050.000 pesos en efectivo en billetes de diversa denominación, tarjetas de crédito y débito de diversas entidades bancarias y una máquina Transbank. Cree recordar que todas estas especies estaban al interior de una mochila en la parte trasera e interior del vehículo. Aclara que no se refiere al maletero, sino que a los asientos de los pasajeros. Hace presente que también les prestó colaboración en el procedimiento una patrulla adicional –integrada por el oficial Mateluna y el cabo 1° Julio Gatica– para evitar quedar en inferioridad numérica respecto a los sujetos fiscalizados.

Contrainterrogado por las defensas, señala que él fue el primero en bajarse del vehículo policial para realizar la fiscalización con las medidas de seguridad respectivas. Complementa señalando que estas medidas de seguridad consisten en bajarse con su armamento apuntando en 45 grados, lo cual es una consideración de seguridad que el sopesó en el momento. Niega que se haya debido a la raza negra de los acusados, sino que por el cambio repentino de velocidad que había realizado anteriormente el vehículo. Inmediatamente refiere haberse entrevistado con el conductor, les ordena a todos los tripulantes que se bajen del vehículo y se les informa que se les va a someter a un control vehicular. El cabo 1° se queda a su costado izquierdo, en la parte de adelante del vehículo, con el armamento también en 45 grados para resguardar la normalidad del procedimiento. La droga la vio en los asientos de los pasajeros de atrás. No recuerda los nombres de los acusados. Señala que él pidió la ayuda de la patrulla adicional, quienes llegaron casi instantáneamente, en no más de cinco minutos. En el intertanto, mantuvieron reducidos a los acusados en la parte delantera del vehículo. Esto significa arrodillados y con las manos visibles y entrelazadas en sus cabezas.

Ante la pregunta aclaratoria del tribunal, el testigo responde que esperaron la colaboración de la patrulla adicional antes de pedirles a los tripulantes del vehículo que descendieran del mismo y efectuar la revisión de su interior. Sin embargo, tras la autorización a la defensa para volver a interrogar al testigo, este vuelve a afirmar que los acusados ya estaban de arrodillados en la parte delantera del vehículo cuando llegó la colaboración de la segunda patrulla policial. Explica que inicialmente tomaron esos resguardos, pero esperaron a la patrulla para hacer más intensiva la fiscalización y verificación de las especies. Autorizado el fiscal para volver a interrogar, puntualiza que la revisión del vehículo empezó cuando tenían a los acusados abajo del mismo y ya había llegado la cooperación de la segunda patrulla. Insiste en que cuando encontraron la mochila ya había llegado la cooperación.

En tercer lugar, compareció el testigo Julio Andrés Gatica Parra, trabajador independiente y excarabinero, cuyo domicilio reserva por razones de seguridad, quien refiere que su intervención en los hechos investigados se limitó a prestar cooperación a la patrulla que dirigía el teniente Molina junto al cabo Guarda. Relata que se trató de la fiscalización de un vehículo marca Suzuki Alto color plateado. Reitera que dentro del vehículo se encontraron 37 tarjetas bancarias de diferentes bancos, 6 teléfonos celulares, 12 envoltorios de color verde y 4 envoltorios blancos que

posteriormente verificaron como marihuana y cocaína respectivamente, 1.046.000 pesos y una máquina Transbank. Todas estas especies estaban dentro de una mochila negra con azul, la cual estaba al interior del vehículo, aunque desconoce en qué parte específica. Explica que las tareas principales llevadas a cabo durante el procedimiento fueron realizadas por la otra patrulla del teniente Molina y el cabo Guarda. Su colaboración consistió en darle alcance al vehículo para poder fiscalizarlo, mantenerse a distancia ante cualquier requerimiento y posteriormente confeccionar las correspondientes actas de derechos, salud, etcétera. La revisión del vehículo correspondió en primera instancia a la radiopatrulla del teniente.

Contrainterrogado por las defensas, señala que no los llamaron, sino que ya estaban trabajando en conjunto con la otra patrulla y llegaron en el mismo instante. Consultado por quién se bajó primero para realizar el procedimiento, contesta que el teniente porque él estaba a cargo del procedimiento. Él señala que se baja del vehículo policial cuando advirtieron que eran cuatro individuos fiscalizados y se mantuvieron a una distancia atentos a prestar cualquier colaboración. Cree que los individuos fueron reducidos de manera tal que se arrodillaron en la vía pública, afuera del vehículo. No recuerda en qué parte del vehículo se arrodillaron porque han pasado muchos meses. Afirma que escuchó en la comisaría que nadie había reconocido el dominio de la mochila.

Sexto: Que el Ministerio Público incorporó mediante su lectura resumida la siguiente prueba documental. En primer lugar, respecto al Número Único de Evidencia (en adelante e indistintamente N.U.E) 7201925, se incorporó el Acta de Recepción Nro. 716 del Servicio de Salud Metropolitana Norte que consigna una cantidad neta de 275,1 gramos y como presunta sustancia marihuana; el Informe Protocolo de Análisis Nro. 716 en que consta que se recibió una muestra de 0,51 gramos por la perito químico farmacéutico Gabriela Bastías Gaibisso; la cadena de custodia respectiva; el Informe de 25 de noviembre de 2024 que describe los test y procedimientos a que fue sometida la muestra y cuyo resultado arrojó como producto cannabis sativa, composición Tetrahidrocannabinol; y el informe sobre efectos y peligrosidad de la cannabis.

En segundo lugar, respecto a la N.U.E. 7201926, se incorporó el Acta de Recepción Nro. 5070-2024 del Servicio de Salud Metropolitana Oriente con una cantidad bruta de 3,5 gramos que consigna como presunta sustancia cocaína; el oficio Reservado Nro. 14968-2024 del Instituto de Salud Pública al Servicio de Salud Metropolitana Oriente cuyo resultado consigna cocaína clorhidrato 99%; el Protocolo de Análisis Químico del Subdepartamento de Sustancias Ilícitas del Instituto de Salud Pública que concluye cocaína clorhidrato 99% firmado por la perito químico Katherine Alcamán Pantoja y el Informe de Peligrosidad Nro. 14968-2024 que detallada los efectos para la salud pública de la cocaína clorhidrato y es suscrito por la mismo perito Alcamán.

En tercer lugar, se incorporaron los certificados de depósito de dinero en el Banco Estado por parte del Ministerio Público por un monto de 1.046.000 pesos.

Séptimo: Que en sus alegatos de cierre, el Ministerio Público concluye que la propuesta fáctica sostenida por el ente persecutor en términos de fecha, lugar, objetos encontrados y el vehículo en que se transportaban estas especies es aceptada por todos los intervinientes y que lo discutido se reduce a la coautoría de los acusados. Estima que esta se puede inferir porque no va a generarse en forma expresa, máxime si uno de los acusados se atribuye responsabilidad exclusiva en este juicio, sin que lo haya dicho durante el transcurso de la investigación.

Como primer indicio sostiene que estaban todos los acusados al interior del mismo vehículo Suzuki Alto, que además es de proporciones pequeñas, lo que facilita la percepción de sus ocupantes respecto de lo que ocurre en su interior. Sostiene que dicho vehículo fue conducido por José Luis Encarnación, quien efectuó cambios repentinos de pista y una aceleración en la marcha al advertir la presencia de carabineros. Argumenta que dicho comportamiento no es propio de quien desconoce lo que transportaba el vehículo.

Además, resalta que al menos tres de los acusados se arrogaron propiedad sobre el dinero incautado, esto es, más de un millón de pesos en efectivo. Agrega que las explicaciones sobre el origen lícito de ese dinero que dan los acusados no fueron respaldada por documentación, ni testimonio alguno.

Indica que las fotografías indican específicamente donde se encontró la mochila, esto es, en la parte de atrás de un vehículo pequeño y sobre el asiento. Resalta que ahí fue donde el cabo 1° Guarda dijo que se había sacado la fotografía porque el mismo vio que los sujetos que iban sentados atrás, esto es, Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo, hacen el movimiento de tomar la mochila y dejarla donde fue fijada fotográficamente.

Cuestiona la tesis de las defensas de atribuirle exclusivamente responsabilidad penal a Carlos Encarnación. Recuerda que este acusado no le dijo eso a ninguno de los carabineros que declararon en juicio. Estima que si era amigo de los acusados habría asumido responsabilidad inmediatamente y su declaración resulta acomodaticia. Afirma que resulta contrario a las máximas de la experiencia que, en medio de un procedimiento policial, Carlos Encarnación habría sacado la mochila que estaba debajo del asiento del copiloto y la habría arrojado hacia atrás, todo sin que ninguno de los funcionarios policiales lo advirtiese. Sostiene que es más plausible que los hechos hayan ocurrido como los refirió el cabo Guarda, quien dijo que siempre la mochila estuvo en la parte de atrás del vehículo y que pasa del piso al asiento donde fue fotografiada.

Si bien reconoce que hay un “cabo suelto” que probablemente buscarán resaltar las defensas —esto es que dos carabineros refieren que ellos abordaron el procedimiento preliminarmente y después llegó la otra patrulla, lo que fue contrario a lo que depuso el último testigo Gatica— estima que no se alcanza a configurar una duda razonable sobre un punto neurálgico, sino que se trata de una circunstancia marginal.

Por su parte, la defensora de Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo resalta que conoce esta causa desde un comienzo, a pesar de que no era la abogada entonces y que le consta el interés que hubo por prestar declaración en múltiples oportunidades, sin embargo no se le quiso tomar declaración a Carlos Encarnación. Recalca que este último reconoció su participación y dio detalles del ilícito investigado. Cree que las declaraciones de los funcionarios policiales buscaron acomodarse a la tesis del Ministerio Público y no realmente a lo que percibieron y recuerdan. Se centra en la declaración del último testigo, exfuncionario policial, quien declara algo contrario a lo que afirmaron los otros carabineros. También destaca una contradicción entre los dos primeros funcionarios que prestaron declaración, acerca de quien fue el primero en acercarse a la ventanilla del conductor. Cree que nunca observaron la dinámica de tirar hacia atrás la mochila. Comparte su convicción acerca de la inocencia de sus representados, pues no necesariamente estaban a la vista las especies encontradas.

A su vez, el defensor de Carlos Encarnación estima cumplida su promesa en la apertura de realizar una defensa colaborativa. Recuerda que su representado prestó declaración pormenorizada y asumió su responsabilidad

por los hechos materia de la acusación. Defiende el carácter no acomodaticio de su declaración aduciendo la alta pena que arriesga su representado.

Por último, la defensa de José Luis Encarnación destaca en sus alegatos de clausura que su representado no portaba dinero ese día y que no estaba en conocimiento de que transportaba droga. Señala que le llama la atención el sesgo terrible de la policía y del ministerio público respecto a los acusados debido a su calidad de inmigrantes irregulares. Sostiene que lo único cierto y no discutido es que su representado viajaba en ese vehículo. No está de acuerdo con las interpretaciones sostenidas por el fiscal, tales como que cualquier amigo habría reconocido inmediatamente ante la policía la propiedad de la droga, o que se cuestione tácitamente que su representado conducía sin contar con licencia de conducir. A su juicio, no se ha superado el estándar de una duda razonable. Ejemplifica con que no hay claridad acerca de quién de los policías se bajó primero y realizó la primera entrevista con el conductor. Concluye que no es baladí porque uno de ellos, quien señala que se bajó primero, ve la gran acción que está en discusión, sobre si se lanzó la mochila para atrás o si ya iba en los pies. Aduce que Carlos Encarnación no tiene ninguna ganancia secundaria para mentir y que su declaración se adecúa a las máximas de la experiencia según la cual, cuando alguien mete un bolso debajo del asiento de un vehículo es perfectamente posible que cualquier otro pasajero no se percate de ello.

Octavo: Que la prueba valorada a la luz de lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal ha sido suficiente para dar por acreditados hechos similares a los contenidos en la acusación en los siguientes términos. El día 18 de julio de 2024, a las 18 horas aproximadamente, en la intersección de las calles 14 de la Fama con calle Costa Rica, de la comuna de Independencia, los imputados sin contar con las autorizaciones competentes portaron, transportaron y mantuvieron en su poder, con el objeto de traficar, al interior del vehículo en el que se movilizaban marca Suzuki, modelo Alto, placa patente única DFZY77, en una mochila, 12 envoltorios de nylon contendora de cannabis con un peso bruto de 295 gramos, 4 bolsas de nylon contenedora de clorhidrato de cocaína con un peso bruto de 3,4 gramos, además de 37 tarjetas bancarias de diversa marca y entidad con diferentes propietarios y 1 dispositivo transbank electrónico. Este vehículo fue conducido por José Luis Encarnación Pérez, Carlos Encarnación como copiloto, quien además portaba dinero en efectivo por la suma de 491.000 pesos, mientras que como acompañantes en los asientos traseros iban Malvin Eduardo Berroa Carrasco, quien portaba la suma de 229.000 pesos y Pablo Raúl Beltrán Araujo, quien mantenía en su poder la suma de 326.000 pesos.

Noveno: Que para dar por acreditados los hechos antes señalados bajo el estándar de prueba exigido en materia penal se tuvieron en consideración los testimonios reproducidos en el considerando quinto, particularmente, la concordancia en las circunstancias esenciales de la declaración de los tres funcionarios policiales y las fotografías exhibidas, quienes coincidieron en la fecha, horario, descripción del vehículo fiscalizado, número de tripulantes y respecto de la droga y demás especies halladas al interior de una mochila, todo lo cual no fue disputado por las defensas, sino que resulta compatible con sus declaraciones. Asimismo, la cantidad de droga, el hecho de tratarse de sustancias que trata la Ley Nro. 20.000 y sus efectos gravemente dañinos a la salud pública se acreditaron suficientemente mediante la prueba documental pertinente y tampoco fueron objeto de mayor debate durante el juicio oral.

Décimo: Que los hechos probados son constitutivos del delito consumado de tráfico de drogas sancionado en el artículo 3 en relación con el artículo 1, ambos de la Ley Nro. 20.000 y le corresponde responsabilidad penal a título de coautor a cada uno de los cuatro acusados.

La autoría de Carlos Encarnación no fue objeto de mayor debate debido a que en su defensa anunció desde sus alegatos iniciales que efectuaría una defensa colaborativa con la pretensión punitiva de la fiscalía, lo que se vio confirmado al momento que su representado renunció a su derecho a guardar silencio y decidió efectuar una declaración auto inculpatoria reconociendo la efectividad de los hechos de la acusación, aunque únicamente respecto a su persona. Por lo tanto, el debate se concentró en si la prueba rendida es suficiente para atribuir responsabilidad penal a título de coautores a los demás acusados, cuyas defensas sostuvieron que, al momento de la fiscalización policial, desconocían la existencia de la mochila y su contenido ilícito.

Resulta pertinente recordar que para que haya lugar a la responsabilidad penal no es necesario que cada interviniente en un suceso delictivo realice por sí mismo la totalidad de las acciones o resultados exigidos por el tipo penal respectivo. En esto se diferencia la coautoría de la autoría directa. La coautoría tiene su fundamento en el principio de representación recíproca, según el cual cada coautor debe responder en nombre propio por su contribución individual y, adicionalmente, en nombre ajeno por lo realizado por sus coautores. Para que sea posible esto último es fundamental que los coautores actúen subjetivamente sobre la base de un plan común (Ürs Kindhäuser, “Infracción de deber y autoría - una crítica a la teoría del dominio del hecho” en Revista de Estudios de la Justicia Nro. 14. Año 2011, pp. 41-52, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, pp. 50 y 51). Adicionalmente, para afirmar una coautoría no basta el requisito subjetivo de actuar bajo un esquema común de interpretación o bajo un concierto previo, sino que debe probarse un requisito objetivo relativo a la contribución que realiza cada coautor al hecho conjunto, la cual además debe tener cierta entidad para así poder calificarse de “representativa” a la luz del principio de representación recíproca. Esta es la mejor interpretación que debe darse a las voces “tomar parte en la ejecución del hecho” y que “facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho” previstas en los números 1 y 3 del artículo 15 del Código Penal, las cuales son reglas de extensión de la punibilidad para los coautores que no satisfacen con su propio comportamiento la totalidad de los requisitos típicos. En contra de la extendida interpretación que funda la autoría directa en el artículo 15 Nro. 1 del Código Penal, se puede sostener que no es necesario acudir a esta disposición, pues la autoría directa se desprende de cada tipo penal de la parte especial por tratarse de la forma de atribución de responsabilidad penal por defecto.

Para tener por configurado tanto el elemento cognitivo del dolo y el requisito subjetivo de la coautoría el tribunal valoró conjuntamente diversos elementos probatorios que conducen a afirmar el conocimiento de todos los acusados respecto a la existencia de la mochila y su contenido, como asimismo concluir la existencia de un concierto previo entre los cuatro acusados tendiente al tráfico de drogas.

De partida, es un hecho pacífico que los cuatro acusados se transportaban en un vehículo marca Suzuki, modelo Alto que era de dimensiones pequeñas, tal como pudo apreciar el tribunal en las fotografías exhibidas a los testigos. Esta circunstancia unida al hecho que la mochila era de dimensiones significativas, como pudo apreciarse en la respectiva fotografía, hace poco plausible que los acusados no se hayan percatado de su existencia al interior del vehículo. Además, se encontró una suma no menor de dinero en efectivo en billetes de diversa denominación sin que ninguno de los tres acusados que se arrogaron su propiedad pudiera justificar su origen lícito, seis celulares, 37 tarjetas bancarias con distintos titulares distintos a los cuatro acusados y una máquina Transbank, hallazgos que resultan

compatibles con la tesis de que se trataría de ganancias obtenidas al alero de una actividad ilícita, como el tráfico de drogas.

Adicionalmente, resultó crucial para la valoración del tribunal la declaración del Cabo 1° Jaime Guarda Santibáñez, quien observó movimientos respecto de un objeto por parte de los pasajeros ubicados en la segunda fila de asientos del vehículo, que fue donde finalmente este mismo carabinero encontró la mochila. Si bien durante su comparecencia a la sala de audiencia, identificó en primera instancia a Malvin Berroa Carrasco como copiloto y a Pablo Beltrán Araujo como conductor, el mismo testigo advirtió inmediatamente que se trató de un error de identificación debido al paso del tiempo. En efecto, Malvin Berroa Carrasco en su declaración se ubicó en la parte trasera detrás del conductor y si bien Pablo Beltrán no declaró expresamente sobre este punto, no fue un hecho discutido que él también estaba sentado en la parte trasera del vehículo. Además, por descarte se trata del único lugar donde podría haberse sentado ambos porque, tanto los testigos como el propio José Luis Encarnación, afirmaron que este último iba conduciendo, mientras que Carlos Encarnación iba como copiloto, como se desprende de las mismas fuentes probatorias.

Por contraposición, la tesis de las defensas estuvo fundada principalmente en la declaración de Carlos Encarnación y no contó con mayor corroboración. Esta consiste en que este imputado habría mantenido escondida la mochila respecto del resto de los acusados y la habría arrojado hacia atrás recién después de que todos los tripulantes del vehículo se bajaron. Esta propuesta fáctica resultó poco verosímil para el tribunal porque había al menos dos carabineros atentos a los movimientos de los acusados y preocupados por su propia seguridad que se habrían percatado fácilmente de esta u otra acción realizada por alguno de los sujetos fiscalizados. Además, la tesis de las defensas entra en directa contraposición con la declaración del Cabo 1° Jaime Guarda Santibáñez, quien señaló que primero le ordenaron abandonar el vehículo al chofer (José Luis Encarnación), luego al copiloto (Carlos Encarnación) y finalmente al resto de los tripulantes (Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo), lo que significa que el segundo nunca estuvo sólo en el vehículo durante la fiscalización. A mayor abundamiento, cabe señalar que no tendría sentido, por razones de seguridad, que los funcionarios policiales hayan permitido que sólo uno de los sujetos fiscalizados permaneciese en el vehículo apartado del resto del grupo y menos aún el copiloto que está cerca del volante.

Otra contradicción denunciada por las defensas dice relación con si estaban presentes dos o cuatro funcionarios cuando se les ordenó a los acusados descender del vehículo. Aún si fuera efectiva esta contradicción, esta recae sobre una circunstancia accidental que en nada altera la conclusión probatoria a la que llegó el tribunal, pues en todo caso había más de un funcionario policial presente. De modo similar, no resultó determinante para la convicción del tribunal si es que fue el cabo 1° Jaime Guarda Santibáñez o el teniente Carlos Molina Vergara, quien se bajó primero del vehículo y se entrevistó con el conductor José Luis Encarnación. Ya sea que el cabo 1°, Jaime Guarda Santibáñez, se haya bajado en primer o segundo lugar, nada obsta a que haya visto el movimiento de los pasajeros en la parte posterior del vehículo dejando algo en la zona de sus pies.

Asimismo, resultó indiciario del conocimiento conjunto de la existencia de la droga y su posesión con fines de comercialización o distribución a terceros, la circunstancia que tres de los encausados portaban sumas de dinero en efectivo que sumaron más de 1.000.000 pesos, sin que justificaran su origen lícito más que por sus propios dichos en orden a que habría provenido de trabajos informales.

En consecuencia, este cúmulo de indicios y antecedentes probatorios permitió al tribunal concluir que todos los tripulantes del vehículo sabían que estaban transportando la mochila negra con azul que contenía las especies ilícitas

ya detalladas anteriormente, lo que permite satisfacer a su respecto tanto el dolo como el requisito subjetivo de un concierto previo respecto de cada uno de ellos.

En cuanto al requisito objetivo de la coautoría también se estimó su concurrencia respecto de cada uno de los acusados, quienes efectuaron contribuciones significativas al plan conjunto de poseer, portar y transportar droga destinada al tráfico, tanto mediante su presencia conjunta al interior del vehículo, como mediante acciones particulares adicionales, tales como, por ejemplo, conducir el vehículo en el caso de José Luis Encarnación, comprar la droga en el caso de Carlos Encarnación, función que éste mismo se atribuyó en su declaración; y en el caso de Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo, mantener en los asientos traseros la mochila e intentar esconderla durante la fiscalización policial, tal como lo señaló el testigo que percibió con sus sentidos dicha maniobra y realizó personalmente el hallazgo de la droga precisamente en el piso del asiento trasero del lado del conductor. Asimismo, se tuvo en consideración que el delito de tráfico de drogas es catalogado doctrinalmente como un delito de emprendimiento, en que se castiga el desarrollo de una actividad delictiva que puede estar conformada por diversos actos, tales como los verbos rectores tipificados en la descripción de la norma de sanción ya referida.

Decimoprimer: Que en la audiencia prevista en el artículo 343 inciso final del Código Procesal Penal, el fiscal señaló que ninguno de los acusados cuenta con antecedentes penales, salvo Pablo Beltrán Araujo, respecto de quien solicita se tenga por configurada la agravante de reincidencia específica prevista en el artículo 12 Nro. 16 del Código Penal porque registra una anotación en su extracto de filiación por la causa Rit 242-2024 del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago como coautor del delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes previsto y sancionado en el artículo 3 en relación al artículo 1 de la Ley Nro. 20.000, condenado el 16 de mayo de 2024 a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo bajo la modalidad de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. Asimismo, acompañó el acta de la sentencia referida y el certificado de ejecutoria de esta de 23 de mayo de 2024. El representante del Ministerio Público mantiene las pretensiones punitivas solicitadas en la acusación, esto es, 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, 200 unidades tributarias mensuales, accesorias legales, el comiso de los instrumentos y efectos del delito y el pago de las costas de la causa respecto de todos los acusados, salvo respecto de Pablo Beltrán Araujo, para quien solicita una pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, 400 unidades tributarias mensuales, accesorias legales, el comiso de los instrumentos y efectos del delito y el pago de las costas de la causa.

La defensora de Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo estima que las declaraciones de ambos permiten configurar respecto de cada uno de sus representados la atenuante de responsabilidad penal prevista en el artículo 11 Nro. 9 del Código Penal. Adicionalmente, en el caso de Malvin Berroa Carrasco solicita se reconozca su irreprochable conducta anterior. En cuanto a las penas privativas de libertad, para Pablo Beltrán Araujo solicita 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. En cambio, para Malvin Berroa Carrasco, solicita 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, o en subsidio, 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo.

El defensor de Carlos Encarnación solicita que se le reconozcan las atenuantes previstas en los Nros. 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Además, pide que se estime esta última aminorante de responsabilidad como muy calificada. Requiere que se imponga una pena privativa de libertad de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva. Para estos efectos, acompaña un informe psicosocial elaborado por la psicóloga Mariana Santander Ortega, cuya parte conclusiva sugiere esta pena sustitutiva.

Igualmente, el defensor de José Luis Encarnación insta porque se le reconozcan las atenuantes previstas en los Nros. 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Para configurar la primera acompaña adicionalmente un certificado del

Ministerio de Relaciones de República Dominicana que consigna que su representado no tiene antecedentes penales en dicho país. Sostiene que también concurre la segunda aminorante de responsabilidad penal porque su declaración fue un insumo base para el veredicto condenatorio. En cuanto al *quantum* de la pena privativa de libertad, solicita la imposición de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo y que se sustituya por la libertad vigilada intensiva, para lo cual acompaña un informe psicosocial emanado del psicólogo Marco Aguilar Serpa, cuya parte conclusiva recomienda esta pena sustitutiva debido a su arraigo social, laboral y familiar en Chile.

En su réplica, el fiscal sostuvo que acompañó los extractos de filiación por objetividad, pero que su planteamiento es que en este caso no basta para configurar la irreprochable conducta anterior. Agrega respecto de las penas sustitutivas que serían improcedentes atendido a lo dispuesto en el párrafo 3° de la Ley Nro. 18.216 titulado “De la regla especial aplicable a los extranjeros”, cuyo artículo 34 prevé para los extranjeros la expulsión como pena sustitutiva a la pena corporal. Estima que no hay fundamento legal para otorgar las otras penas sustitutivas previstas en dicha Ley, pues se encontrarían previstas exclusivamente para no extranjeros. Sin embargo, como la Ley Nro. 20.000 excluye expresamente la posibilidad de la expulsión, concluye que las penas que se impongan deben ser de cumplimiento efectivo.

Decimosegundo: Que se acogerá la atenuante de irreprochable conducta anterior prevista en el artículo 11 Nro. 6 del Código Penal respecto de Malvin Berroa Carrasco, José Luis Encarnación y Carlos Encarnación, considerando sus extractos de filiación sin anotaciones. Asimismo, se les reconocerá a todos los acusados la aminorante de responsabilidad prevista en el artículo 11 Nro. 9 del Código Penal por cuanto mediante sus declaraciones realizaron una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. En efecto, sus declaraciones fueron útiles para situar a cada uno de los acusados en sus respectivos lugares al interior del vehículo y subsanar imprecisiones como las señaladas por el testigo Jaime Guarda Santibáñez al momento de intentar reconocerlos en la sala de audiencia.

Asimismo, y únicamente respecto de Pablo Beltrán Araujo, se acogerá la circunstancia agravante de reincidencia específica prevista en el artículo 12 Nro. 16 del Código Penal por cuanto fue condenado anteriormente por un delito idéntico, según se desprende de los documentos aportados por el fiscal y detallados en el considerando anterior.

Decimotercero: Que mediante la remisión que el artículo 3 hace al artículo 1 de la Ley Nro. 20.000 se castiga, en abstracto, el presente delito con las penas de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multas de 40 a 400 unidades tributarias mensuales. Respecto a Malvin Berroa Carrasco, José Luis Encarnación y Carlos Encarnación concurren dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante de responsabilidad penal. De conformidad a lo previsto en el artículo 68 inciso tercero del Código Penal, la pena privativa de libertad se rebajará un grado y se impondrá en su mínimo, esto es, 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Para arribar a esta decisión, se tuvo en consideración que a pesar de que esta última disposición usa el vocablo “podrá”, una interpretación lógica y sistemática de las normas de determinación de la pena lleva a concluir que la discrecionalidad del juez se limita a determinar la cantidad de grados que debe bajarse atendiendo al número y entidad de dichas circunstancias aminorantes, pero la rebaja en sí resulta imperativa tratándose de la concurrencia de dos o más atenuantes y ninguna agravante. Así lo ha sostenido la doctrina nacional (Juan Pablo Mañalich Raffo, “¿Discrecionalidad judicial en la determinación de la pena? Una defensa de la obligatoriedad de la rebaja de pena por concurrencia de múltiples circunstancias atenuantes” en Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales Vol. II (2013), Nro. 4, pp. 137-172) y ha sido recientemente resuelto por la jurisprudencia (en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 31 de marzo de 2025, considerando

noveno, recaída en causa Penal Nro. 590-2025. En este caso, estamos frente a sólo dos atenuantes y ninguna de ellas revista una entidad mayor que amerite bajar más de un grado.

En el caso de Pablo Beltrán Araujo, concurre una circunstancia atenuante y otra agravante. En consecuencia, se compensarán racionalmente y se impondrá la pena en el mínimo del marco penal abstracto previsto, esto es, 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. Para arribar a las penas privativas de libertad antedichas se tuvo en considero que no se probaron en el juicio mayores consecuencias perniciosas que las inherentes al ilícito y que la gran mayoría de la droga era marihuana y no otro tipo de droga más perjudicial para la salud pública.

En cuanto a las penas accesorias, por tratarse de un mandato legal, se impondrá a Pablo Beltrán Araujo las penas previstas en el artículo 28 del Código Penal, estas son, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Igualmente, a Malvin Berroa Carrasco, José Luis Encarnación y Carlos Encarnación se les impone las penas accesorias previstas en el artículo 29 del Código Penal, estas son, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

En lo relativo a las penas pecuniarias y de conformidad al artículo 70 del Código Penal, esta se impondrá en el mínimo legal respecto de cada uno de los acusados, esto es, 40 unidades tributarias mensuales.

Se decretará el comiso de las 37 tarjetas bancarias y la máquina marca Transbank incautadas de conformidad a lo previsto en el artículo 31 ter del Código Penal, pues el acusado Carlos Encarnación reconoció que compró la mochila con todas esas especies en su interior, lo que fue corroborado por la prueba rendida en juicio según la cual dichas especies estaban en el interior de la misma mochila. Asimismo, se decretará el comiso del total de dinero incautado, esto es, 1.046.000 pesos, por tratarse de efectos del delito.

Por último, se condena a los acusados a soportar el pago de las costas de la causa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 inciso primero del Código Procesal Penal.

Decimocuarto: Que por cumplirse los requisitos legales objetivos y subjetivos a su respecto y tras haber sido solicitado oportunamente por sus defensas, se le sustituirá únicamente a Carlos Encarnación y a José Luis Encarnación sus respectivas penas privativas por la libertad vigilada intensiva, cuyo plazo de intervención corresponderá a la extensión de la pena a imponer, como lo dispone el artículo 17 letra b) de la Ley Nro. 18.216, tiempo durante el cual deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 17 letras a), b) y c) de la Ley Nro. 18.216.

En consecuencia, no se comparte la interpretación sostenida por el representante del Ministerio Público, quien afirma que tratándose de ciudadanos extranjeros sólo procedería la pena sustitutiva de expulsión por haberse regulado expresamente este caso en el párrafo 3° del mismo cuerpo legal. Se concluye que realizar una diferenciación arbitraria entre nacionales y extranjeros resultaría contraria a la igualdad ante la ley consagrada constitucionalmente y en diversos tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile en materia de derechos humanos.

En cambio, las penas privativas de libertad impuestas a Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo deberán cumplirse de manera efectiva. En el caso del primero, su defensa no solicitó pena sustitutiva alguna en la oportunidad procesal correspondiente y tampoco se acompañaron antecedentes que dieran cuenta de la idoneidad subjetiva del condenado. En el caso del segundo, la magnitud de la pena de crimen impuesta impide la procedencia de pena sustitutiva alguna.

Por estas consideraciones, lo preceptuado en las normas citadas y lo dispuesto en los artículos 1, 11 Nro. 6 y 9, 12 Nros. 16, 14 Nro. 1, 15 Nros. 1 y 3, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 68 y 70 del Código Penal; 1, 45, 47, 295, 296, 297, 323, 329, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal; 1 y 3 de la Ley Nro. 20.000, se declara que:

- I. Se condena a Malvin Eduardo Berroa Carrasco, José Luis Encarnación Pérez y Carlos Encarnación, todos ya individualizados, a las penas privativas de libertad de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, multa de 40 unidades tributarias mensuales para cada uno, las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como coautores del delito de tráfico de drogas cometido el 18 de julio de 2024 en la comuna de Independencia. El no cumplimiento de las penas pecuniarias dará lugar a lo dispuesto en el artículo 49 del Código Penal.
- II. Se condena a Pablo Raúl Beltrán Araujo a la pena privativa de libertad de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 unidades tributarias mensuales, la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como coautor del delito de tráfico de drogas cometido el 18 de julio de 2024 en la comuna de Independencia. Para efectos del cómputo de la pena corporal, le sirven de abono 278 días que ha permanecido privado de libertad de manera ininterrumpida desde que se decretó su prisión preventiva el 18 de julio de 2024 y hasta el 21 de abril de 2025, según consta en la certificación del Jefe de Unidad de Causas de este tribunal, y todo el tiempo que medie entre la fecha del presente fallo y aquella en que adquiera carácter de sentencia firme, mientras se mantenga privado de libertad.
- III. Se sustituye únicamente la pena corporal impuesta a José Luis Encarnación y Carlos Encarnación por la de libertad vigilada intensiva, por el tiempo de la condena, debiendo el delegado elaborar un plan de intervención que se aprobará en audiencia oportunamente, para lo cual deberán estos acusados residir en la ciudad de Santiago.

Si dichas penas sustitutivas fueren revocadas o dejadas sin efecto, cumplirán las penas privativas de libertad impuestas de manera efectiva. En estos casos, se someterán los condenados al cumplimiento del saldo de la pena inicial, sirviéndole de abono el tiempo de ejecución de dicha pena sustitutiva, los 278 días que han permanecido privados de libertad de manera ininterrumpida en esta causa, entre el 18 de julio de 2024 cuando se decretó su prisión preventiva y el 21 de abril de 2025, según consta en la certificación del Jefe de Unidad de Causas de este tribunal, y todo el tiempo que medie entre la fecha del presente fallo y aquella en que adquiera carácter de sentencia firme, mientras se mantengan privados de libertad.

En cambio, las penas impuestas a Malvin Berroa Carrasco y Pablo Beltrán Araujo deberán cumplirse de manera efectiva.
- IV. Se condena en costas a todos los acusados.
- V. Se decreta el comiso de las 37 tarjetas bancarias, la máquina marca Transbank y los 1.046.000 pesos incautados.

Para efectos del artículo 17 de la ley 19.970 y en caso de que no se hubiere fijado la huella genética de los condenados previamente, se ordena que ésta se determine, previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, a fin de que se incluya en el Registro Nacional de ADN de Condenados del Servicio de Registro Civil e Identificación.

De conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la ley 20.568, inclúyase la presente sentencia en el respectivo informe mensual al Servicio Electoral, una vez que se encuentre ejecutoriada.

Destruyanse las drogas incautadas, en caso que no se hubiere realizado previamente.

Oficiese al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago a efectos de poner en su conocimiento la presente sentencia dictada en contra de Pablo Raúl Beltrán Araujo, quien mantiene suspendido el cumplimiento de una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva en la causa Rit 242-2024 de dicho tribunal.

Ejecutoriada esta sentencia, oficiese a los organismos que corresponda para hacer cumplir lo resuelto y remítase los antecedentes necesarios al juzgado de garantía competente. Asimismo, en dicha oportunidad, póngase a los sentenciados que correspondan a disposición del referido tribunal para el cumplimiento de las penas impuestas.

Regístrese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó el juez suplente Hermes Hein Aedo.

Rit: 64-2025

Ruc: 2400832549-5

CODIGO DELITO : (7007)

Pronunciada por la Sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las juezas titulares Ana Carolina Larredonda Muñoz, quien presidió; y Marcela Nilo Leyton en calidad de integrante; y el juez suplente Hermes Hein Aedo, quien no firma por haber terminado su suplencia.